Derecho constitucional y teoría del Estado

ANDERSON, L. L. The line between federal and state court jurisdiction. V. Derecho procesal.

ARANGIO-RUIZ, V. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. V. Derecho internacional público.

BASSI, Franco. Il principio della separazione dei poteri. "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", año XV, núm. 1. enero-marzo, 1965, pp. 17 a 113, Milán, Italia.

El profesor de Derecho administrativo, Franco Bassi, hace un estudio sobre la separación de poderes tanto desde el punto de vista político como constitucional e histórico.

Considera que el estudio de la separación de poderes puede hacerse usando tres criterios: un criterio científico o jurídico, que trata de precisar la esencia de las funciones atribuidas a los diversos órganos estatales; un criterio técnico o funcional, que busca el modo de distribución de las funciones del Estado para asegurar el mejor rendimiento de las instituciones; finalmente, un criterio político que busca garantizar la satisfacción de determinados fines sociales. El criterio que subraya el autor es el jurídico, pero observa que siempre existe el problema de si hay o no coincidencia entre una separación subjetiva de poderes y una separación objetiva de funciones. Además, el criterio jurídico sólo puede estudiarse sobre una base histórica y política.

Considera el autor que la separación de poderes como principio es muy antigua y se remonta a los clásicos. Pero el desarrollo constitucional existe hasta el siglo XVII en Inglaterra. La Constitución de Cromwell de 1653, la Revolución Inglesa de 1688 y la obra de Locke, son la base histórica de este elemento de nuestro mundo contemporáneo.

Sin embargo, el principio político-constitucional de la separación de poderes lo estableció sin duda Montesquieu en su libro *El Espíritu de las Leyes*, publicado en 1748. Se discute si su doctrina tuvo un origen fundamentalmente político, no obstante la idea del autor de darle una apariencia jurídica.

El profesor Bassi estudia con profundidad la obra de Montesquieu y, después, examina la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787. La fórmula norteamericana existía en un ambiente diverso al de la sociedad europea, pues en Europa la separación de poderes existía como un principio frente al despotismo monárquico y en Norteamérica se temía al despotismo de la Asamblea Legislativa. Por eso es que la revisión judicial de la cons-

titucionalidad de las leyes es una institución extraña a Montesquieu. El autor estudia después el principio de la separación de poderes en las Constituciones de la Revolución Francesa hasta llegar a la situación contemporánea.

En la actualidad, el autor dice que existe una connotación imprecisa. Los franceses usan la expresión "separación de poderes", los anglosajones también, en tanto que los italianos utilizan preferentemente la frase "división de los poderes". Queda todavía por aclarar cuál sería la mejor expresión, de acuerdo con la problemática actual en que se debate, si hay una separación de poderes o una distinción de funciones.—Lucío CABRERA ACEVEDO

BREITEL, Charles D. *The Lawmakers*. "Columbia Law Review", vol. 65, núm. 5, mayo, 1965, pp. 749-777. New York, E.U.A.

Breitell sostiene, como tesis centrales: a) que el derecho, contra lo que comúnmente se cree, es obra de gentes interesadas, ya que aquél no se reproduce por sí mismo sino que se hace necesario un impulso externo (los tribunales se mueven a instancia de parte; el poder legislativo actúa por obra de los grupos de intereses sociales que claman por la expedición de una ley; etcétera); b) por otra parte, el derecho, también contra un estereotipo muy difundido, es un fenómeno omnipresente en la vida social, pues no hay espacio vital que no tenga sentido jurídico (lo que el derecho no prohíbe, lo permite).

La idea tradicional de la división de las funciones gubernamentales (legislativa, ejecutiva y judicial) constituye una falsedad histórico-constitucional que, en opinión del autor, no funciona ni funcionó jamás, pues de funcionar realmente paralizaría toda obra gubernamental. Lo cierto es que el derecho es una resultante de la aplicación de todas las dependencias gubernativas, como se desprende de la frecuente interferencia de cada uno de los tres poderes clásicos en la actividad, supuestamente exclusiva, de los otros dos: por ejemplo, intervenciones del ejecutivo en el proceso legislativo (iniciativa, veto, promulgación, facultad para celebrar tratados, intervención en la esfera económica fijando precios, tasas, interés, salarios, etcétera.)

Al margen de toda discusión generalmente filosófica e interminable, sobre la definición del derecho, para Breitell este último consiste, básicamente, "en todas aquellas formas en que una sociedad políticamente organizada trata de influir e influye de hecho, a través de sus órganos, en la conducta de sus miembros, con vistas a su propia conservación", y sus ingredientes son no únicamente mandatos y sanciones, sino también advertencias y normas no exigibles.

Concluye el autor haciendo la apología de una reivindicación del Parlamento como supremo poder legislativo —cuyas funciones se ven deterioradas a menudo por la actuación del ejecutivo y de los jueces— dentro de una auténtica concepción democrática en la que los otros dos poderes, particularmente los tribunales, deben dosificar su participación en el proceso legislativo, a través de una autolimitación, que deberá ser su mayor aportación a la sociedad democrática.—Fausto E. RODRÍGUEZ

BREWER, Allan Randolph C. **Partidos políticos en el derecho venezolano.** "Revista del Ministerio de Justicia", año XIII, núm. 51, octubre-diciembre de 1964, pp. 264-295. Caracas, Venezuela.

Es un estudio exhaustivo y profundo de la situación de los partidos políticos en Venezuela, especialmente a la luz de las disposiciones constitucionales reglamentadas por la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, de 15 de diciembre de 1964.

A diferencia del derecho mexicano, que regula la materia de partidos políticos en la Ley Federal Electoral, de 4 de diciembre de 1951, en Venezuela ha sido objeto de un ordenamiento específico, independiente de la ley electoral, que se apoya en los principios que consagra el texto constitucional de 1961, particularmente el artículo 114, en el cual se establece el carácter democrático de los partidos políticos, siguiendo en esto la tendencia de las leyes fundamentales modernas, como lo hace notar el autor, las cuales configuran a los citados partidos como auténticas "instituciones" de naturaleza constitucional, pudiendo mencionarse a este respecto el artículo 21 de la Ley Fundamental de la República Federal alemana, de 1949; el artículo 4º de la Constitución de la V República Francesa, de 1958; el artículo 141 de la Constitución brasileña, de 1946; el artículo 49 de la Constitución de la República italiana, de 1949; y, podríamos agregar, por ser posterior a este interesante estudio, que la Constitución guatemalteca de 1965 contiene un capítulo especial (Título I, XX Capítulo V, artículos 27-33) destinado a regular los partidos políticos.

De acuerdo con la definición que contiene el artículo 2 de la citada Ley venezolana de los partidos políticos, son "agrupaciones de carácter permanente cuyos miembros convienen en asociarse para participar por medios lícitos, en la vida política del país, de acuerdo con programas y estatutos libremente acordados por ellos", definición de la cual el autor extrae tres elementos para caracterizarlos: su carácter permanente, sus fines políticos y lícitos, los métodos democráticos.

A continuación, se examinan las disposiciones relativas a la constitución de los citados partidos, que pueden ser regionales o nacionales, y que pueden funcionar provisionalmente, sin perjuicio de que el Consejo Supremo Electoral, ante el cual deben registrarse, les conceda la inscripción definitiva, para lo cual necesitan: demostrar que cuentan con determinado número de partidarios; que su declaración de principios y su programa de acción política poseen carácter democrático; comunicar la descripción y dibujo de los símbolos y emblemas del partido, así como la indicación de los supremos organismos directivos, personas que lo integran y los cargos que dentro de ellos desempeñan.

La solicitud de inscripción puede ser objetada por cualquier ciudadano y por el Ministerio de Relaciones Interiores, en la inteligencia de que si tales objeciones son desestimadas por el Consejo Supremo Electoral, esa resolución puede ser impugnada ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no resulta admisible en nuestro derecho, ya que toda esta materia es de carácter político y por tanto no puede cuestionarse a través del juicio de amparo.

Por otra parte, si el referido Consejo Supremo Electoral niega la inscripción solicitada a un partido político, los interesados pueden combatir esa decisión ante la propia Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no puede ocurrir en México, en una situación similar, por las razones antes indicadas.

La Ley mencionada reglamenta también la cancelación del registro de los partidos políticos, tanto regionales como nacionales: cuando lo solicite el mismo partido, como consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste; cuando ha dejado de participar en las elecciones en dos periodos constitucionales sucesivos; y cuando se comprueba que ha obtenido su inscripción con fraude a la ley, o dejado de cumplir con los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales. Y esta cancelación puede hacerse por el Consejo Supremo Electoral, de oficio, a petición del Ministerio de Relaciones Interiores, del Ministerio Público o de otro partido, pero no podrá realizarse sin previa audiencia del partido afectado, cuyos representantes pueden oponerse a ella, acudiendo ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, y en tanto no se dicte sentencia firme el propio partido puede seguir realizando sus actividades.

También se prevé la disolución de los partidos que, de manera sistemática, propugnen o desarrollen actividades contra el orden constitucional y no hayan incurrido en ninguna de las causales de cancelación, correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia, a instancia del Poder Ejecutivo Nacional, conocer y decidir la disolución del partido de referencia, tratándose aquí de una competencia similar a la que tiene el Tribunal Constitucional Federal alemán sobre disolución de partidos políticos, en casos similares.

Finalmente, la ley de referencia reglamenta la propaganda política, por cualquier medio de difusión del pensamiento, oral y escrito, de acuerdo con las limitaciones establecidas por la Constitución y las leyes, especialmente la que se comenta, que prohíbe las publicaciones anónimas, las que atenten contra la dignidad humana y ofendan la moral pública, o las que tengan por objeto promover la desobediencia a las leyes; y además, en cuanto a los medios de difusión, no pueden utilizarse las publicaciones, radioemisoras, televisoras y demás medios oficiales de cultura y difusión, para la propaganda de los partidos políticos.—Héctor Fix ZAMUDIO

DE MIGUEL S., José A. Amparo y Habeas Corpus en la Constitución de 1961. "Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal", núm. 130, julio-diciembre de 1965, pp. 17-49. Caracas, Venezuela.

El interés por el amparo se ha incrementado en la doctrina venezolana con motivo de la consagración de esta institución en el artículo 49 de la Ley Fundamental vigente, de 1961, que se ha inspirado ostensiblemente en nuestro proceso constitucional, pero desde luego con menor extensión, ya que de acuerdo con dicho texto fundamental, el propio amparo protege a todo habitante de la República de Venezuela en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, en conformidad con la ley.

El autor realiza un estudio muy minucioso tanto de los antecedentes como del alcance de la institución venezolana de protección de los derechos del hombre, y realiza, primeramente, una crítica muy aguda de la confusión que existe y ha existido, no sólo en su país sino en la mayoría de las naciones iberoamericanas, entre los derechos subjetivos públicos de la persona humana consagrados constitucionalmente y las verdaderas garantías constitucionales, que son en realidad los instrumentos procesales para protegerlas judicialmente; y concluye, muy certeramente, en el sentido de que la verdadera garantía de los derechos individuales, económicos y sociales consagrados por la moderna y avanzada constitución venezolana, es precisamente el juicio de amparo, y lo mismo puede decirse en México, donde se utiliza indebidamente la denominación de garantías individuales, doblemente inapropiada, porque el primer capítulo de nuestra Carta Fundamental no sólo establece derechos públicos individuales, sino también de carácter social (como ocurre con los artículos 3º y 27), y además porque, en sentido estricto, la única garantía de tales derechos es precisamente nuestro juicio de amparo.

En segundo lugar, De Miguel estudia el *habeas corpus*, primero en sus antecedentes angloamericanos, especialmente a partir de la famosa ley inglesa de 1679, y luego analiza su introducción en el derecho constitucional venezolano, lo que ocurrió en el artículo 32 de la Constitución de 1947, que protegía la libertad individual contra violaciones constitucionales realizadas por cualquier autoridad, y que se reglamentó provisionalmente en la Disposición Transitoria Décimaquinta, en tanto se expidiera la Ley Reglamentaria, que no llegó a formularse.

Por el contrario, la Constitución de 1953, que sustituyó a la anterior, de corte autoritario, no sólo omitió el *habeas corpus*, sino que por el contrario, en su Disposición Transitoria Tercera, atribuyó al Presidente de la República (General Pérez Jiménez) todo lo relativo al ejercicio de los derechos individuales.

Volvió a resurgir el *habeas corpus* en la Constitución democrática vigente en 1961, pues en tanto que se reglamenta el citado artículo 49, que consagra el amparo como institución más general, la Disposición Transitoria Quinta establece las bases provisionales exclusivamente del amparo de la libertad personal o *habeas corpus*, para proteger únicamente a la libertad personal contra restricciones inconstitucionales de cualquier autoridad.

Sobre este particular, el Ministerio de Justicia ha publicado en el año de 1965 un proyecto de Ley de *Habeas Corpus*, que ha sometido a la aprobación del Congreso Nacional, y en cuya "Exposición de Motivos" se expresa que primeramente se pretende regular el *habeas corpus*, para después expedir una Ley de Amparo que comprenda la protección de los restantes derechos fundamentales; y el citado proyecto ha tomado muy de cerca las disposiciones de nuestra Ley de Amparo, en lo que resultan aplicables.

El autor realiza un estudio minucioso del amparo abstractamente considerado y dedica especial atención a la institución mexicana, pero sin omitir una referencia a la legislación o jurisprudencia de otros países iberoamericanos que han consagrado la misma institución, especialmente Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Argentina, e inclusive el establecido en

la Constitución española republicana de 1931; para referirse, por fin, a su establecimiento en Venezuela.

Hace notar el autor los esfuerzos que se hicieron anteriormente para consagrar el amparo en las disposiciones constitucionales, debiendo hacerse mención a la laudable labor del tratadista venezolano Ángel Francisco Brice, quien, desde 1939 (*La libertad individual y las formas de protegerla*. "Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia", núm. 45, marzo de 1939, pp. 1633-1651; posteriormente, en 1945: *El juicio de amparo y el Ante-Proyecto de Constitución*, en "Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales", enero-diciembre de 1946, 87-138, y *Habeas Corpus o Derecho de Amparo*, "Revista de Derecho y Legislación", octubre-noviembre de 1959, pp. 195-206), ha propugnado por la consagración del amparo en la Ley Fundamental venezolana, de acuerdo con el modelo mexicano, en lo que resulte aplicable; y se señala también un proyecto de Ley de Amparo Personal, presentada al Senado en 1945; así como el intento de establecer el amparo en el proyecto de Constitución de 1947, pero que el Constituyente limitó al *habeas corpus*, como se ha dicho.

Considera De Miguel que el Constituyente de 1961, donde finalmente se logró consagrar el amparo, fue claro en su intención pero no feliz en su expresión, ya que acoge, como principio general, el amparo para la protección (garantía) de los derechos constitucionales y deja su regulación a una ley especial posterior; y, provisionalmente, reglamenta el amparo en uno de esos derechos, el fundamental dentro de los derechos individuales, o sea la libertad personal, y lo realiza mediante el *habeas corpus*.

El primer paso en la reglamentación se ha dado con el proyecto mencionado del Ministerio de Justicia, sobre Ley de *Habeas Corpus*, pero, como sostiene el autor, es necesario elaborar una Ley de Amparo más amplia, la cual debe resultar necesariamente laboriosa, debido no solamente a la novedad de esta institución sino también a su gran alcance. La realidad social e histórica venezolana habrá de contribuir a modelar un cuerpo legal, que inspirado en la doctrina y práctica de otros países, que ya cuentan con esa garantía (especialmente México), se ajuste a las necesidades y vivencias de Venezuela.

Este documentado y profundo estudio incluye un Apéndice, en el cual se contienen el proyecto de bases constitucionales que el autor redactó para presentar a la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución de 1961, en el que se advierte la influencia y el conocimiento de la institución mexicana.—Héctor FIX ZAMUDIO

FEERICK, John D. *The Proposed Twenty-Fifth Amendment to the Constitution*. "Fordham Law Review", vol. XXXIV, núm. 2, diciembre, 1965, pp. 173-206. E.U.A.

La experiencia histórica de varias paralizaciones del Gobierno —dieciséis ocasiones, que abarcan un lapso total de 37 años— motivadas por la incapacitación del Presidente de la República, con los riesgos de caos y confusión que tales situaciones pueden favorecer, particularmente graves en ausen-

cia o falta del Vicepresidente, han llevado a la conciencia norteamericana la urgencia de poner un punto final a las deficiencias de la propia Constitución Federal de los Estados Unidos, que permitían estos peligros. Tal es la motivación principal de la enmienda vigésimo-quinta a dicha Carta Fundamental, propuesta el 6 de julio de 1965 por el Congreso y que aún se encuentra en trance de ratificación por parte de las Legislaturas locales.

Este interesante artículo de Feerick —un especialista, con varios trabajos y un libro sobre “los problemas de la sucesión presidencial”— está dirigido a relatar sumariamente los antecedentes históricos que han conducido a la proposición de esta enmienda, a describir las vicisitudes de su aprobación legislativa y a realizar un análisis de sus disposiciones.—Fausto E. RODRÍGUEZ

FORKOSCH, Morris D. Freedom of the Press: Crowell's Case. “Fordham Law Review”, vol. XXXIII, núm. 3, marzo de 1965, pp. 415-448. New York, E.U.A.

Un estudio cuidadoso, documentado y ameno sobre este caso judicial clásico en el derecho de los Estados Unidos, considerado como una de las etapas importantes en el desarrollo de la libertad de imprenta consagrada en la primera enmienda de la Constitución Federal.

El profesor Forkosch describe la situación histórica y los antecedentes de este clásico asunto judicial, así como una semblanza de las personas importantes que intervinieron en el juicio, particularmente Alexander Hamilton, que figuró como uno de los abogados del acusado, y James Kent, entonces magistrado de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, y posteriormente, miembro del máximo tribunal federal; así como el trasfondo político de la lucha de los entonces partidos federalista y republicano, ya que dicho asunto se inició y resolvió definitivamente entre los años de 1803 y 1805.

La lucha por la efectiva libertad de imprenta se inició en los Estados Unidos, todavía bajo la dominación inglesa, con el famoso caso *Zenger*, que se desarrolló en la ciudad de Nueva York en el año de 1795, y aunque no se estableció tesis jurisprudencial, ya que finalizó con la absolución del acusado por parte del jurado, se advierte la influencia de las ideas libertarias en la defensa que se hizo del mismo procesado.

En cuanto a *Crowell*, se trataba de un periodista de filiación federalista que fue acusado en el año de 1803, es decir durante el gobierno republicano de Jefferson, de violar los principios del *Common Law* sobre libelos sediciosos; y tanto en el primer proceso, que se llevó a efecto (a través de un *certiorari* concedido por el aludido James Kent) ante el Circuito de la referida Suprema Corte de Nueva York, reunida en Claverack bajo la presidencia del magistrado Morgan Lewis, de filiación republicana, como en la petición de un nuevo juicio ante la misma Suprema Corte en Pleno, esta vez reunida en Albany en el año de 1804, se hicieron valer por la acusación y por la defensa una serie de argumentos fundamentales para la interpretación de la libertad de prensa, que muy recientemente había sido elevada al rango constitucional, ya que la primera enmienda, junto con otras nueve, entró en vigor el 15 de diciembre de 1791.

La controversia fundamental en este clásico asunto se desarrolló en torno al problema de si, de acuerdo con los principios del *Common Law* y tratándose de acusaciones de libelos sediciosos, el jurado tenía facultad para decidir exclusivamente sobre los hechos, es decir respecto de la publicación del libelo por parte del acusado, o si también podría calificar la intención dolosa del autor de la publicación, pues, de otra manera, este último aspecto debería quedar al arbitrio del juez de derecho, que preside los debates.

El problema es muy importante, debido a que los precedentes ingleses, sumamente discutidos por la doctrina de esa época, se inclinaban por la primera solución, lo que implicaba la condena casi automática del acusado, ya que el jurado estaba maniatado al decidir sólo sobre la existencia de la publicación por parte del procesado, a tal extremo que en un caso famoso (*Dean's Case*), que dio lugar en 1784 a un curioso veredicto de "culpable sólo de publicar", debido a la brillante defensa del famoso abogado inglés y futuro canciller Thomas Erskine, el cual preconizaba precisamente la facultad del jurado para decidir sobre la intención del inculcado. Esta lucha por la libertad de prensa motivó en la propia Inglaterra la Ley de Fox sobre libelos (*Fox Libel Act*), expedida en 1792, que precisamente aceptó la facultad del jurado para decidir sobre el dolo del procesado al publicar el libelo relativo.

La defensa de Alexander Hamilton en el caso *Crowell* fue sumamente brillante y aceptada plenamente por el magistrado Kent, sentando las bases para la ley sobre libelos del Estado de Nueva York, promulgada el 6 de abril de 1805, con apoyo en la cual se concedió un nuevo juicio para el citado periodista.

La doctrina de Hamilton, admitida después en la Ley de 1805 y cuyos principios fueron elevados al rango constitucional en la Carta Fundamental del propio Estado de Nueva York, en el año de 1821 (y que subsisten en la Constitución local vigente), se orientó en el sentido de que la libertad de prensa consiste en publicar la verdad por buenos motivos y fines razonables, de tal manera que si un acusado de publicar un libelo sedicioso prueba la verdad de sus aseveraciones y los fines razonables que persigue, debe ser absuelto por el jurado, el cual tiene facultad de apreciar tanto los hechos como la intención del procesado.—Héctor FIX ZAMUDIO.

GRAUE, Desiderio. **Algunas reflexiones sobre el Ministerio Público y el juicio de amparo.** "Criminalia", año XXXI, núm. 4, abril de 1965, pp. 158-173. México, D. F.

Este excelente trabajo constituye el discurso del autor para su ingreso en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y plantea una serie de problemas fundamentales en torno a la actividad del Ministerio Público Federal, especialmente en el campo del juicio de amparo, en el cual su intervención no se ha precisado suficientemente por la doctrina ni por la jurisprudencia, pues no obstante que el artículo 5º, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, le otorga la calidad de parte, resulta discutible que pueda equipararse a las otras partes que intervienen en el propio juicio de

amparo, como lo son el quejoso, las autoridades demandadas y el llamado tercero perjudicado.

De por sí la institución del Ministerio Público Federal, tal como se encuentra delineada por el artículo 102 constitucional y la Ley Orgánica relativa, resulta sumamente complicada, por el gran número de atribuciones y obligaciones que se le confieren y los campos tan diversos en los cuales debe intervenir, que van desde la investigación de los hechos delictuosos y el ejercicio de la acción penal en la materia federal, hasta la función de consejero jurídico del Gobierno de la Unión; pero donde la intervención de los miembros de esta institución resulta más difícil de precisar, es en el juicio de amparo, pues hablar de parte "equilibradora" o "reguladora" no nos aclara la situación ni la naturaleza de su actividad.

La intervención del Ministerio Público Federal en el juicio de amparo se reduce, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, a una función de asesoramiento, formulando un dictamen cuando estime que existe interés público, y de vigilancia sobre el procedimiento y la ejecución de la sentencia protectora, por lo que, sin desconocer la importancia teórica de tales actividades, no puede afirmarse que configuran una verdadera participación en el juicio de amparo, como una de las partes contendientes, ya que es posible sostener que se trata de un sujeto procesal muy importante, pero no de una verdadera parte, y por el contrario, se ha descuidado señalar la intervención del Agente del Ministerio Público (local o federal), que hubiese ejercitado la acción penal en el proceso criminal (entonces sí, verdadera parte), en la cual se dicta la sentencia impugnada en amparo directo; ya que, de acuerdo con el artículo 180 de la Ley de Amparo, se le otorga implícitamente la calidad de tercero perjudicado, al conferirle la facultad de comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte, formulando alegatos sobre la acusación.

Sin embargo, la parte más importante del trabajo del nuevo miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales radica en su tesis, que expuso brillantemente tanto en el Sexto Congreso Nacional de Procuradores, celebrado en mayo de 1963, como en el Tercer Congreso Interamericano del Ministerio Público, efectuado en esta ciudad del 12 al 21 de julio del mismo año de 1963, en el sentido de que el Ministerio Público, como parte en el proceso penal (no en el amparo), debe tener legitimación para solicitar la protección federal contra la sentencia absolutoria, legitimación que tanto la ley como la jurisprudencia le niegan actualmente.

Este criterio provocó discusiones muy interesantes en ambos Congresos, especialmente en el Interamericano (*Memoria*, México, 1964, pp. 546-548), debiendo tomarse en consideración, para el cabal conocimiento de este apasionante problema, los trabajos que con motivo del Congreso Nacional mencionado redactaron los tratadistas mexicanos Ignacio Burgoa (*El Ministerio Público y el juicio de amparo*, "El Foro", N° 43, octubre-diciembre de 1963, pp. 69-81) y Jorge G. García Rojas (ponencia presentada en la Mesa Redonda efectuada el 14 de junio de 1963, en la Facultad de Derecho de la UNAM, mismo número de "El Foro", pp. 83-87).

Los argumentos del autor son muy atrayentes, pues se apoyan fundamentalmente en la titularidad de los derechos públicos de carácter social por parte

del Ministerio Público, que tiene a su cargo la tutela de los derechos de la sociedad y de los grupos sociales, y por ello propone que se reformen los artículos 103 y 107 de la Constitución y los relativos de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, con el objeto de que los Agentes del propio Ministerio puedan acudir a la justicia federal cuando se afecten tales derechos sociales, y no solamente los patrimoniales de las personas jurídicas oficiales, como ocurre actualmente según lo dispuesto por el artículo 9º de la propia Ley Reglamentaria.

Aunque teóricamente no existiría objeción para que el Ministerio Público que hubiese ejercitado la acción penal presentara una demanda de amparo contra la sentencia absolutoria, si bien no con la base de la violación de derechos (o garantía sociales), sino porque el juicio de amparo se utiliza no solamente para la protección de los derechos subjetivos públicos, sino inclusive para el llamado control de legalidad en materia penal (párrafo tercero del artículo 14 constitucional); sin embargo, consideramos que en la práctica puede ocasionar numerosos inconvenientes, que sería mucho más sencillo y eficaz otorgar al ofendido o a sus herederos una mayor participación en el proceso penal, para que, actuando como verdaderas partes, así lo fuesen de manera subsidiaria al Ministerio Público, en su caso, tuviesen la legitimación de interponer el amparo contra la sentencia absolutoria, y no el Ministerio Público, que carece de un interés directo en la condena del procesado.—HÉCTOR FIX ZAMUDIO

HAZARD, John N. Negritude, Socialism and the Law. "Columbia Law Review, vol. 65, núm. 5, mayo, 1965, pp. 778-809. New York, E.U.A.

Este trabajo de Hazard constituye una muy completa e interesante exposición del problema, hoy confrontado por los diversos países africanos de lengua francesa que recién han alcanzado su independencia política respecto de la metrópoli, en relación con el orden jurídico y social a adoptar para sus pueblos.

La alternativa que sus líderes se plantean cae, en todo caso, dentro de la tendencia socialista y el meollo de la cuestión radica en el modelo correspondiente a seguir entre la línea de un sistema comunista ortodoxo o la más moderada de una combinación de este último con algunos elementos ajenos compatibles con la idiosincrasia y espíritu del africano; simbiosis ésta que los jefes políticos del Senegal bautizan con el *slogan* de *negritude*. La elección del socialismo, como sendero a recorrer, supone el rechazo inmediato de toda posible ingerencia de los principios del capitalismo, rechazo que en manera alguna traduce una actitud negativista y de repudio frente al sistema predominante en el mundo occidental, sino tan sólo la creencia de que las actuales condiciones de penuria socio-económica de la región africana en cuestión reclaman un programa perentorio de desarrollo económico, que únicamente un modelo socialista, que propicie la intervención estatal, puede suministrar.

El extenso artículo del profesor Hazard aborda el tema con criterio comparatista, tomando como materia principal de su estudio las características

más típicas de esa concepción de la *negritude* que, concretamente en el Senegal, se encuentra en proceso de ensayo y construcción en el presente, frente a otros sistemas socialistas más fieles al modelo soviético que también hoy practican otras de las nuevas naciones de la región occidental del Continente africano y entre las cuales el autor elige, como representativa, la República de Guinea.

Los rasgos del sistema designado con la expresión *negritude*, giran en torno a diversos aspectos neurálgicos, jurídicos y económicos, de toda organización socialista: el concepto de liderazgo del Partido; la estructura y disciplina interna de éste; sus relaciones con el aparato estatal; los derechos del hombre; el derecho de propiedad; la contratación colectiva y el derecho y procedimiento penales. Aspectos todos éstos que Hazard analiza con cierto detalle en su trabajo, y de cuyo tratamiento se desprende la impresión de que, en realidad, nos encontramos frente a una nueva concepción del socialismo que recoge en pocas directrices del humanismo tradicional de Occidente.—Fausto E. RODRÍGUEZ

LA VALLE, Francesco. *La continuità tra l'ordinamento comunitario europeo e l'ordinamento italiano e la gerarchia unitaria delle loro fonti normative*. "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", año XIX, núm. 2, junio de 1965, pp. 637-679. Milán, Italia.

Uno de los problemas más apasionantes de los últimos tiempos consiste en determinar la naturaleza de las disposiciones que rigen las Comunidades europeas, ya que con su creación se ha revolucionado el concepto clásico de la división entre derecho nacional e internacional, pues no responde tampoco a la concepción clásica del federalismo que, aunque ha sido propiciado por algunos autores, es rechazado por el sector mayoritario de la doctrina.

El autor examina con gran agudeza los aspectos fundamentales a que da lugar la correlación entre el citado ordenamiento comunitario europeo y las disposiciones internas de cada uno de los países miembros, que ha sido objeto últimamente de una abundante elaboración doctrinal y jurisprudencial, y por los tribunales de los países que las integran, sin que se hubiese llegado a precisar satisfactoriamente sus límites, sus fuentes y la jerarquía normativa correspondiente.

La Valle se inclina por considerar, a nuestro modo de ver acertadamente, que existe una continuidad entre la legislación italiana y la emanada de los órganos de las Comunidades, puesto que la primera se ha integrado con el derecho comunitario, sin que esto signifique que exista una confusión entre ambos ordenamientos, pero sí una correlación, puesto que los tribunales italianos deben aplicar las disposiciones emanadas de los órganos de la Comunidad y sólo en el supuesto de que exista una cuestión de interpretación o se discuta la validez de la disposición aplicable, tal cuestión debe decidirse de manera prejudicial, ya sea a través de los medios de impugnación existentes, y, en caso de no haberlos, el propio juez ordinario debe suspender el procedimiento y remitir el expediente a la Corte de Justicia de las Comunidades

para que decida exclusivamente esta materia prejudicial (artículo 3 de la Ley de 13 de marzo de 1958, núm. 204).

Otro aspecto muy importante que examina el autor es la justificación constitucional de las leyes ordinarias, por virtud de las cuales se ratificaron las convenciones que dieron origen a las propias Comunidades europeas, y que han sido ardientemente discutidas por la doctrina, ya que en el fondo implican una reforma de la Carta Fundamental, rebatiendo La Valle, con profundos argumentos, el apoyo que se ha pretendido darles a tales leyes ordinarias de ratificación, en los artículos 11 y 10 de la propia Constitución italiana; auspicando, por el contrario, la idea de que las modificaciones a dicha Ley Suprema, que no se formularon de acuerdo con el procedimiento de reforma constitucional previsto en el diverso artículo 138 de dicha Carta Magna, constituyen el contenido de un complejo normativo de carácter constitucional.

En cuanto a la materia de las fuentes normativas comunitarias nacionales y de su jerarquía, considera el autor que las convenciones que crearon las Comunidades respectivas deben estimarse como superiores y prevalentes sobre las disposiciones constitucionales mismas de los países miembros, de tal manera que, cuando se discuta en un proceso ordinario sobre la prevalencia de las disposiciones internas y las convenciones que crearon las Comunidades, esta cuestión debe ser resuelta por la Corte Constitucional italiana, considerando como de mayor jerarquía a las normas comunitarias.

Por lo que respecta a las normas ordinarias internas y los llamados reglamentos comunitarios (que no son sino disposiciones normativas emanadas de los órganos de las Comunidades), no puede hablarse de una jerarquía, pues corresponden a campos diversos, ya que existen sectores en los cuales se ha reservado competencia a dichos órganos supranacionales, y en esos campos reservados las disposiciones internas deben conformarse a las directivas de los "reglamentos comunitarios", y en ese ámbito de competencia, tales reglamentos poseen una fuerza superior a las leyes nacionales, y por lo tanto, tienen posibilidad de abrazar las disposiciones internas que les sean incompatibles; y no son susceptibles de modificación por leyes nacionales posteriores que los contradigan.

Todo ello significa que, en las materias reservadas especialmente a los órganos legislativos de las Comunidades, las leyes italianas, tanto nacionales como regionales, pueden considerarse anulables, no sólo por contradecir la Constitución nacional, sino también cuando sean contrarias a los "reglamentos comunitarios".—Héctor FIX ZAMUDIO

LEIBHOLZ, Gerhard. **El legislador como amenaza para la libertad en el moderno Estado democrático de partidos.** "Revista de Estudios Políticos", núm. 137, septiembre-octubre, 1964, pp. 5-17. Madrid, España.

Según Leibholz, el mayor peligro potencial para la libertad individual radica, dentro de un sistema político democrático de partidos de corte moderno, en el carácter preeminente y monopolista del poder legislativo y del producto de su actividad: leyes que regulan prácticamente los aspectos más

decisivos de la vida social, incluso con fuerza obligatoria para los otros poderes políticos, y que sólo pueden ser derogadas o modificadas por otros actos similares del propio poder legislativo.

Otro aspecto importante del problema reside en la transformación que se ha operado en la moderna concepción parlamentaria de estilo europeo, de tal manera que el actual Parlamento —a diferencia del Parlamento del siglo pasado, que fincaba su prestigio y competencia en un espontáneo mecanismo selectivo de los representantes nacionales más ameritados y autorizados, campeones en la defensa de la libertad individual y resistentes a la consigna de partido o de grupos de presión, que actuaba con entera independencia de criterio— es un fruto del proceso de igualación y democratización de la actividad político-social, en el que los representantes populares llegan al cargo comprometidos con las diversas facciones. Finalmente, aporta su grano de arena a este riesgoso proceso la tendencia paternalista del Estado benefactor y protector, que amenaza convertirse por su cuenta en un nuevo estilo de "totalitarismo" que haga sucumbir subrepticamente la independencia, la libertad y la autonomía individuales.

En estas condiciones, sugiere Leibholz que "la misión del legislador en una democracia de sistematización radical-igualitaria está en compensar la pérdida de la libertad mediante la igualdad", creando un ambiente favorable para que los despojados de aquélla la logren nuevamente.—Fausto E. RODRÍGUEZ

LESSONA, Silvio. La funzione del Tribunale Costituzionale Federale della Repubblica Tedesca. "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", año XIV, núm. 4, octubre-diciembre de 1964, pp. 799-818. Milán, Italia.

En este trabajo se realiza una magnífica y apretada síntesis de las amplísimas facultades de que está dotado el Tribunal Constitucional Federal de Alemania Occidental, según las disposiciones relativas de la Constitución Federal de 23 de mayo de 1949, y las Leyes de 12 de marzo de 1951, 21 de julio de 1956, 26 de junio de 1959 y 8 de septiembre de 1961, sobre la organización, la competencia y el procedimiento del referido Tribunal Constitucional Federal (*Bundesverfassungsgericht*) tomando en consideración que también existen algunos tribunales constitucionales locales en las Provincias (*Länder*) de Baviera, Renania-Palatinado y Hesse.

El distinguido jurista italiano examina brevemente las complicadas y extensas facultades del órgano de justicia constitucional federal, estimando que es aquel que reúne el mayor número de atribuciones entre los órganos de justicia constitucional actualmente existentes y algo similar podríamos afirmar en México respecto de nuestra Suprema Corte de Justicia, aunque no pueda estimarse, estrictamente, como un tribunal puramente constitucional, sino como el órgano supremo del Poder Judicial Federal.

El profesor Lessona describe, breve pero certeramente, todas y cada una de las atribuciones del Tribunal Constitucional Federal alemán, que divide en tres grandes categorías:

a) Funciones que se traducen en la tutela de la Constitución y de la estructura de la República Democrática Federal.

b) Funciones relativas a la observancia de la Constitución y a la certeza del derecho de manera objetiva (control sobre la constitucionalidad de las leyes y disposiciones de carácter general).

c) Funciones dirigidas a la tutela individual de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Sin embargo, su enfoque está dirigido esencialmente al examen de la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana establecidos por los artículos 1º a 19 de la Carta Fundamental federal, así como aquellos otros que la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional equipara a los primeros, es decir los consagrados por los diversos artículos 33, 38, 101 y 104 de la misma Constitución.

La violación de tales derechos fundamentales legitima al individuo, o a la persona jurídica particular afectada, para acudir al referido Tribunal Constitucional Federal contra los actos, resoluciones o la aplicación de disposiciones legales por parte de cualquier autoridad, incluso de carácter judicial, a través de un medio de impugnación denominado *Verfassungsbeschwerde* (recurso constitucional), que de cierta manera puede equipararse a nuestro juicio de amparo, cuando se utiliza para la defensa de los derechos del hombre consagrados en nuestra Constitución Federal.

El autor realiza un estudio comparativo entre las atribuciones de la Corte Constitucional italiana y el referido Tribunal Constitucional Federal Alemán, y, particularmente, en el sector de la defensa de los derechos de la persona humana, señalando la ausencia en Italia de un remedio similar, recurso constitucional (*Verfassungsbeschwerde*), ya que la tutela de tales derechos se obtiene, indirectamente, a través de la impugnación de las leyes que afecten los propios derechos, pero que no pueden plantear los particulares sino determinados órganos del Gobierno, o el juez de la causa, de oficio o a petición de parte, en un determinado proceso.

No obstante la liberalidad de la legislación alemana sobre la impugnación de los actos violatorios de los derechos del hombre, se han establecido varias limitaciones, con objeto de evitar que la Corte Constitucional se vea inundada por reclamaciones de esta naturaleza, y de esta manera, el recurso constitucional no es admisible sino hasta que se agoten los medios de impugnación ordinarios (artículos 19, fracción 4ª, de la Constitución y 93, fracción 2ª, de la Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal), a no ser que el mismo Tribunal estime que de no decidir desde luego sobre la reclamación se produciría un daño grave e irreparable para el quejoso (artículo 90, fracción 2ª, de la citada Ley Reglamentaria).

Además, aun habiéndose agotado los recursos ordinarios, la demanda del particular se somete a un examen preliminar por parte de una comisión integrada por tres de los jueces constitucionales, la que puede desechar el recurso por extemporáneo, por vicios de forma o porque sea inadmisibile o notoriamente infundado, aun cuando se llenen todos los requisitos legales para su admisión; siendo necesario que cuando menos dos de los jueces estimen que la decisión del recurso servirá para el esclarecimiento de una cuestión de derecho constitucional, o que, en caso de no decidir dicha cuestión, se ocasiona un daño grave o irreparable para el reclamante (artículo 93 de la Ley Reglamentaria, según reforma de 3 de agosto de 1963).

A pesar de todas estas limitaciones, Lessona señala que en el decenio de 1951 a 1962, fueron interpuestos 9,831 recursos, de los cuales sólo fueron declarados fundados poco menos que el cinco por ciento de los mismos.

Resalta el autor la magnífica labor que ha venido realizando el citado Tribunal Constitucional alemán en el campo de la justicia constitucional, y destaca la importancia de sus fallos, que contienen importantes enseñanzas tanto para el jurista como para el sociólogo, ya que cada una de ellas puede considerarse como una verdadera monografía, por la profundidad y minuciosidad con la cual se tratan los temas planteados en las controversias constitucionales relativas, las que se han reunido en los quince volúmenes publicados hasta el año de 1964, los que representan un esfuerzo verdaderamente asombroso realizado en tan poco tiempo por los dieciséis magistrados que integran el propio Tribunal.—Héctor FIX ZAMUDIO

MENÉNDEZ, Emilio. El Poder Judicial y la Constitución.—The Judicial Power and the Constitution. "Comparative Juridical Review", vol. 2, 1965, pp. 37-90, 91-142. Coral Gables, Florida, E.U.A.

No se trata, como su título pudiera indicarlo, de un estudio de justicia constitucional comparada, sino, en realidad, de la organización judicial de acuerdo con las normas constitucionales, tanto desde el punto de vista histórico como de las que actualmente rigen en los principales países del mundo, y, desde luego, con una referencia especial para el derecho cubano.

El autor, anteriormente Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Cuba, nos proporciona una visión panorámica de los orígenes constitucionales del poder judicial, particularmente en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, los de la época colonial española y los directos de Cuba, a partir de su independencia de España.

A continuación, se refiere a las corrientes de renovación que aparecen a partir de la primera postguerra y se continúan, con mayor fuerza, en la segunda, sobre la organización judicial inspirada en el principio que Mirkin Guetzevitch calificó, con gran fortuna, como "racionalización del poder", es decir, con la tendencia en la rama judicial de establecer la independencia de sus miembros frente a las otras ramas del poder; la consagración de las garantías de su inamovilidad y permanencia; y, lo que es más importante, la elevación de la dignidad de la judicatura, a la cual se le encomienda, en muchos aspectos, el control de la constitucionalidad de los actos de las restantes autoridades, llegándose inclusive a la creación de Tribunales Constitucionales especializados, como el austriaco de 1920-1929, restablecido en 1945, y los actuales de Italia, Alemania Occidental, Yugoslavia, Creta y Turquía.

El profesor Menéndez examina brevemente a los regímenes constitucionales de la Rusia soviética y de las democracias populares que han imitado su estructura política fundamental, para llegar a la conclusión de que, al menos formalmente, las leyes fundamentales de estos países socialistas, aunque de tendencias autoritarias, consagran los principios de independencia y autonomía del poder judicial, y la posibilidad de la defensa procesal de algunos de los derechos fundamentales de carácter individual.

El aspecto más minucioso de este excelente trabajo se refiere a la administración de justicia cubana, tal como fue reglamentada por las Constituciones de 1940 y la vigente de 1959 (aunque con algunas incursiones socialistas en los años posteriores, por la tendencia reciente del gobierno de Castro).

La parte más interesante del estudio se refiere a la composición y funcionamiento del Tribunal Supremo de Cuba, que es una combinación del sistema angloamericano con los tribunales de justicia constitucional europeos, y con una amplitud de funciones de gran trascendencia para el equilibrio y conservación de las instituciones constitucionales.

Dicho tribunal supremo se compone de treinta magistrados y un presidente, y se divide en cinco salas de justicia y dos de orden administrativo. Cada una de tales salas de justicia se integra por siete magistrados y un presidente (de lo Civil; de lo Criminal, de lo Contencioso-Administrativo y de Leves Especiales), con excepción de la que, siguiendo la terminología española, aunque no estrictamente el modelo creado por la constitución de 1931, se denomina "Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales", que funciona con ocho magistrados y un presidente, cuando conoce de asuntos laborales, y con esos nueve miembros y además, con los presidentes de las otras tres salas, los dos magistrados más antiguos, y el Presidente de todo el Tribunal, haciendo un total de quince magistrados, cuando conoce de problemas de constitucionalidad.

Esta función de justicia constitucional es muy amplia y, al menos en teoría, implica la tutela integral de la Carta Fundamental, puesto que comprende tanto las reclamaciones contra la aplicación concreta de normas inconstitucionales, como la acción directa respecto de las leyes contrarias a la Carta Magna, cuando es interpuesta, al menos, por veinticinco ciudadanos; y también la impugnación, por el afectado, de cualquier acto lesivo de sus derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, todo ello con apoyo en la Ley núm. 7 de 31 de mayo de 1949.

El profesor Menéndez realiza constantes referencias comparativas de la organización judicial cubana con la que impera en los Estados Unidos y en Puerto Rico, ya que es actualmente catedrático en la Universidad de este último, referencias que son sumamente útiles para tener una idea de las semejanzas y contrastes de los respectivos ordenamientos judiciales.—Héctor FIX ZAMUDIO

O'NEIL, Robert M. *Television, Tort Law and Federalism*. "California Law Review", vol. 53 núm. 2, mayo, 1965, pp. 421-485. Berkeley (Cal.), E.U.A.

La creciente complejidad de las instituciones jurídicas tradicionales, derivada del acelerado despliegue de las invenciones técnicas, como la radio y la televisión, que han venido a suscitar nuevas hipótesis y situaciones imprevistas por los juristas que ayer confrontaron los problemas de responsabilidad por daños (*torts*) construyendo mecanismos jurídicos que hoy resultan poco o nada funcionales para las nuevas condiciones, ha obligado a los especialistas a replantearse los problemas sobre bases más amplias y a tratar de resolverlos me-

dante una adaptación de las teorías jurídicas tradicionales a la realidad contemporánea.

El panorama así esbozado genéricamente ofrece aspectos muy interesantes en particular conexión con las nuevas formas de responsabilidad por daños (*torts*) que han venido surgiendo, en los últimos treinta años, en el campo de la actividad comercial que se desarrolla a través de los llamados "medios de comunicación con las masas", en especial tratándose de las emisiones por radio y televisión.

El profesor O'Neil realiza aquí un pormenorizado análisis del problema en la experiencia de la vida norteamericana, haciendo un esfuerzo por destacar las bases jurídicas de la responsabilidad tanto de los dueños de las empresas propietarias de esos medios de comunicación y propaganda, como de las diversas compañías comerciales que patrocinan los programas que por ellos se transmiten al público radio-teleauditor, en relación con los posibles daños que eventualmente pueden inferirse, con motivo de tales emisiones, a las personas privadas (en sus intereses, fama, y reputación); y, concretamente, la influencia limitadora y modeladora que sobre esa responsabilidad ha ejercido la legislación federal norteamericana a la luz de la primera enmienda constitucional y de la Ley Federal de Comunicaciones; y de múltiples casos tramitados ante los tribunales, no sólo en relación con la protección a la reputación y a la esfera de la vida privada, sino también por lo que hace a la protección de las propias emisoras de radio y televisión en materia de garantías a la libertad de expresión y del derecho de censura por el Estado.—
FAUSTO E. RODRÍGUEZ

RUBIO LLORENTE, F. La Corte Constitucional italiana. "Revista de la Facultad de Derecho", núm. 31, junio de 1965, pp. 205-265. Caracas, Venezuela.

La Corte Constitucional italiana, introducida en la Constitución republicana que entró en vigor el primero de enero de 1948, ha sido objeto de una abundantísima serie de estudios por los ilustres juristas italianos, y por lo tanto, existe una doctrina impresionante, e inclusive una revista especializada en esta materia, "Giurisprudenza Costituzionale", que recoge las principales tesis de este organismo de control constitucional y los comentarios de los más distinguidos tratadistas italianos.

Por el contrario, los jurisconsultos latinoamericanos, aunque mencionen incidentalmente esta magnífica institución, no la han analizado específicamente, y por ello es muy laudable el estudio minucioso, documentado y preciso del profesor Rubio Llorente, ya que nos proporciona la visión de un tratadista hispanoamericano sobre este órgano fundamental de la organización político-jurídica de Italia.

Señala el autor, con toda agudeza, la necesidad contemporánea de la justicia constitucional, pues se ha observado un predominio creciente del Ejecutivo frente a un Legislativo que va perdiendo fuerza, y por lo tanto, el equilibrio sólo puede restablecerse a través del juez constitucional, que aparece como fruto de la misma corriente de predominio del propio Ejecutivo.

Se hace un estudio de la génesis de la Corte Constitucional italiana, y después se aborda con mucha penetración, el sugerente problema de la naturaleza de dicho organismo, que ha sido objeto de debates muy apasionados en la doctrina, e inclusive en la jurisprudencia de la misma Corte, para llegar a la conclusión, desde nuestro punto de vista absolutamente correcta, de que aun en relación con la atribución de conocimiento de las impugnaciones respecto de la inconstitucionalidad de las leyes, que es la más debatida, debe considerarse que la Corte no sólo es un organismo judicial por su composición y estructura, sino que también realiza una función jurisdiccional, pues fundamentalmente, y reconociendo el amplio margen de discrecionalidad del juez constitucional italiano, que ha sido estudiado brillantemente por Mauro Capelletti, especialmente en su monografía *L'attività e i poteri del giudice costituzionale in rapporto con il loro fine generico* (Milano, 1957), reseñado por nosotros en este "Boletín" (núm. 31, enero-abril de 1958, pp. 244-246), debe hacerse notar que es un juez preeminente, pero juez al fin, sujeto en su actividad a la iniciativa de las partes, que no sólo es necesaria para desencadenarla, sino que determina también el ámbito de la misma; y además se trata, en el fondo, de la resolución de una controversia por un sujeto imparcial, situado por encima de los intereses en conflicto (si no quiere hablarse de partes en sentido estricto), todo lo cual conforme al punto de vista del profesor Rubio Llorente, que es el que sigue una buena parte de los juristas italianos, justifica el carácter jurisdiccional de la actividad de la referida Corte Constitucional frente a las otras teorías de la naturaleza paralegislativa o superlegislativa, o de la función autónoma constitucional, que, si bien muy respetables, no podemos compartir, aunque sean sostenidas por autores tan prestigiosos como Calamandrei y Azzariti.

Se examina a continuación, con todo detalle y minuciosidad, cada una de las cuatro atribuciones que corresponden a la Corte Constitucional italiana, pues además de las tres que señala el artículo 134 de la Constitución de 1948, es decir: controversias relativas a la legitimidad constitucional de las leyes y actos con fuerza de ley; conflictos de atribuciones entre los poderes del Estado, o entre el Estado y las regiones autónomas; y acusaciones contra el Presidente de la República y sus Ministros, deben agregarse, como correctamente lo sostiene el autor, la decisión sobre la competencia que ha de resolver la impugnación por el Gobierno, de una Ley Regional (artículo 127 constitucional), y el juicio sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las peticiones de referéndum derogatorio, previstas en el artículo 75 de la misma Carta Fundamental y reglamentadas por el artículo 2 de la Ley constitucional núm. 1, de 11 de marzo de 1953.

Estos cinco sectores son analizados con profundidad y precisión por el profesor Rubio Llorente, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia italianas, y finaliza su brillante estudio con un utilísimo apéndice, en el que se consigna la traducción española de las disposiciones legales que reglamentan la organización y las funciones de la referida Corte Constitucional, tales como la Ley Constitucional de 9 de febrero de 1948, núm. 1 (normas sobre los juicios de legitimidad constitucional y sobre las garantías de independencia de la Corte Constitucional); Ley también constitucional núm. 1, de 11 de marzo de 1953 (normas complementarias de la Constitución en lo concerniente a la

Corte Constitucional); Ley núm. 87 de la misma fecha, 11 de marzo de 1953 (normas sobre la constitución y funcionamiento de la Corte Constitucional); y Ley núm. 20, de 25 de enero de 1962 (normas sobre procedimiento y juicios de acusación).

Estimamos que el excelente análisis del profesor Rubio Llorente constituye una aportación muy valiosa para el estudio comparativo de las instituciones de justicia constitucional, que son las únicas que, a nuestro modo de ver, pueden coadyuvar a la eficaz realización del Estado democrático y social de derecho, frente a la preeminencia de un Ejecutivo que, aun sin proponérselo, es cada vez más poderoso.—Héctor Fix ZAMUDIO

SHAO-CHUAN, L. La justicia popular china en el periodo postconstitucional V. Derecho procesal.

SIMI, Valente. Formazioni sociali e categoria professionale. "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", año XIX, núm. 2, junio de 1965, pp. 436-473. Milán, Italia.

El problema del reconocimiento de las formaciones o grupos sociales intermedios, ha sido planteado por las disposiciones programáticas de los artículos 2º y 5º de la Constitución Republicana italiana, que entró en vigor el 1º de enero de 1948, y que reconocen plenamente los derechos colectivos de los entes sociales existentes entre el individuo y el Estado.

El autor realiza agudo análisis de estos dos preceptos constitucionales, para considerar que en tanto que el artículo 2º mencionado se refiere a los derechos de carácter colectivo del hombre, es decir, a los de la persona humana que forma parte de las organizaciones sociales, el 5º se contrae a las sociedades intermedias descentralizadas, que no obstante conservar su autonomía institucional forman parte de la organización político-administrativa del Estado, como ocurre claramente con el municipio.

En cuanto a los grupos sociales propiamente dichos, reconocidos y protegidos en su aspecto general por el citado artículo 2º constitucional, y contemplados de manera específica por otros preceptos de la misma Carta Fundamental, pueden considerarse como tales: la familia, las comunidades religiosas y la categoría profesional, que a su vez deben distinguirse de las asociaciones voluntarias a que se refiere el diverso artículo 18 de la misma Constitución italiana, porque estas últimas no implican una comunidad de intereses dirigidos al desarrollo de la personalidad humana, sino exclusivamente los instrumentos para alcanzar determinados fines no prohibidos por la ley.

Simi caracteriza las formaciones y grupos sociales propiamente dichos, a través de cuatro elementos: a) Intermediación, que se traduce en la protección de un interés colectivo diverso del individual o del general; b) Su formación histórica y necesaria, que significa que tales grupos no surgen libremente de un acto adhesión de los asociados, sino de la comunidad de intereses que conforman un verdadero *status*; c) Representación estructural; d) El carácter de organismos en los cuales se desarrolla la personalidad del hombre y que son considerados trascendentes por el Estado.

El autor examina minuciosamente la estructura de las agrupaciones profesionales en el derecho constitucional italiano, que están integradas por trabajadores, entendido este último término en un sentido amplio, por lo que, relacionando los preceptos anteriormente mencionados con el diverso artículo 39 de la citada Ley Fundamental, se puede concluir en el sentido de que tales organismos profesionales se centran en los sindicatos, cuya libre formación está reconocida por la última de las disposiciones citadas.

Pero al mismo tiempo que los sindicatos laborales se forman libremente, sin embargo no dependen absolutamente de la libre voluntad de sus asociados, si se toma en consideración que lo que determina el agrupamiento de los trabajadores, es la categoría de sus intereses de carácter profesional, es decir el *status*, y, en este sentido, las disposiciones jurídicas que los rigen y la representación que ejercen se aplican también a los no asociados, cuando poseen el mismo género de intereses, como lo demuestran los contratos colectivos sobre condiciones de trabajo, que se aplican tanto a los sindicalizados como a los no asociados (y aquí puede invocarse la ley de 14 de julio de 1959, núm. 741, sobre los citados contratos colectivos); como ocurre también en el Derecho mexicano del trabajo, tanto respecto de los contratos colectivos propiamente dichos (artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo), como con mayor razón respecto de los llamados contratos-ley, que regulan toda una rama de la industria o de la producción (artículo 58 del mismo ordenamiento).

Esto no significa, como lo afirma certeramente Simi, contradiciendo en esto a un sector de la doctrina, que se trate de una organización corporativa, porque los sindicatos no son organismos descentralizados del Estado, sino plenamente autónomos, en los cuales se establece un equilibrio entre la libertad de los asociados, tanto para elegir la actividad profesional (artículo 4º constitucional) como el sindicato al cual desean pertenecer, y la necesidad de una regulación colectiva del *status* profesional, y esta última se patentiza en la aplicación de disposiciones generales a la categoría respectiva, así como la participación del asociado únicamente en los sindicatos que tengan por objeto la defensa de los intereses colectivos de su misma categoría profesional.—
Héctor Fix ZAMUDIO

SRZENTÍĆ, Nikola. On the new constitutional judicature of Yugoslavia. "The New Yugoslav Law", año XV, números 1-3, enero-septiembre de 1964, pp. 20-28. Belgrado, Yugoslavia.

La nueva Constitución de Yugoslavia, promulgada en 1963, introdujo un sistema de justicia constitucional que se aproxima notablemente a los regímenes occidentales, particularmente de la República Federal alemana, pues en tanto que los países socialistas, inspirados en el derecho constitucional soviético y a cuya orientación debería pertenecer la propia Yugoslavia, que se considera también como socialista, encomiendan a la Asamblea Legislativa, o al Presídium de la misma, el examen de las violaciones constitucionales, incluyendo la conformidad de las leyes secundarias con la Carta Fundamental; y en la citada Ley suprema de 1963, se establece una Corte Constitucional Federal y Cortes Constitucionales locales, en cada una de las seis Repúblicas

Federadas, con facultades muy similares a las del Tribunal Constitucional Federal alemán y los tribunales constitucionales de algunas de las provincias alemanas, como Baviera, Renania-Palatinado y Hesse.

En este conciso y claro estudio, el autor, magistrado de la citada Corte Constitucional, explica la naturaleza y funciones de este nuevo órgano de justicia constitucional, que ha sido reglamentado el 31 de diciembre de 1963, y cuyo texto se consigna como Apéndice en la misma Revista (pp. 41-62).

Ni el autor ni la ley mencionada establecen la organización e integración de la citada Corte, que están fijadas por los textos constitucionales, sino exclusivamente las facultades de que está investido dicho órgano federal de justicia constitucional, pudiendo dividirse sus facultades en tres aspectos diversos.

a) Resolución de controversias relativas a la constitucionalidad o legalidad de disposiciones legislativas o de carácter general; que a su vez comprendería: la compatibilidad de las leyes con la Constitución; de una ley local con el derecho federal; y de las disposiciones generales de cualquier autoridad respecto de la Carta Fundamental o del derecho federal (artículo 17 de la Ley Reglamentaria).

b) Protección de los derechos fundamentales y libertades individuales infringidos por un acto o actividad de cualquier autoridad (artículos 36 y siguientes de la citada Ley).

c) Resolución de controversias entre las comunidades de carácter socio-político de las diferentes repúblicas federadas (artículos 43 y siguientes).

d) Decisión de los conflictos de jurisdicción entre los tribunales ordinarios y las autoridades federales, y entre los propios tribunales y las autoridades locales de las diferentes repúblicas federadas (artículos 46 y siguientes).

Respecto de la primera atribución, que es una de las más trascendentales que pueden pertenecer a un tribunal constitucional, tanto la Constitución Federal (artículo 243, fracción 3) como la Ley Reglamentaria (artículo 29) establecen que, cuando la Corte Constitucional considere incompatible una ley federal o local con la Carta Suprema, su decisión determina que dicha ley deje de tener efecto desde el momento de la publicación de la sentencia; es decir, se le otorgan a dicha resolución efectos de carácter general similares a los fallos de las Cortes Constitucionales de Italia, Alemania Occidental y Austria, y diversos de las sentencias de nuestra Suprema Corte de Justicia, cuando deciden la inconstitucionalidad de una ley a través del juicio de amparo que, por aplicación de la llamada "fórmula de Otero", se traducen exclusivamente en la desaplicación de la norma inconstitucional respecto del quejoso que solicitó la protección (artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, y 76 de la Ley de Amparo).

Cuando la inconstitucionalidad declarada por la Corte Constitucional yugoslava se refiere a disposiciones generales que carecen del carácter de ley, ésta se traduce no sólo en la ineffectividad, sino que implica la derogación o abrogación de las citadas disposiciones.

Un aspecto peculiar del derecho yugoslavo consiste en la obligación de la Corte Constitucional de notificar de manera preliminar a la Asamblea Federal o a las Asambleas de las Repúblicas Federadas, su opinión sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones legales respectivas, lo cual implica que di-

chas Asambleas deben modificar esas normas hasta lograr su conformidad con la Constitución, y sólo en el caso de que no lo hagan en un plazo de seis meses, la propia Corte puede declarar su inefectividad (artículos 245 y 246 de la Constitución y 25 de la Ley Reglamentaria).

De gran trascendencia es la facultad de la Corte Federal Constitucional de conocer, a petición de los individuos afectados o de las organizaciones dotadas de facultades autónomas (*self-government*), de la violación de sus derechos fundamentales y libertades individuales establecidas por la Constitución, puesto que esta atribución significa una aproximación aún mayor, del derecho yugoslavo respecto del occidental, si se toma en consideración que, por regla general, en los países socialistas inspirados en el sistema soviético los derechos fundamentales no se encuentran garantizados por remedios procesales de carácter jurisdiccional, sino exclusivamente a través de reclamaciones ante las autoridades administrativas, especialmente, las Procuradurías (Cfr. Henry Puget, *Le contrôle de l'administration: Les systèmes classiques, L'ombudsman et la Prokuratura*, en "Revue Internationale de Droit Comparé", París, enero-marzo de 1965, pp. 5 y ss.)

Este medio de impugnación, aunque limitado a aquellos supuestos en que no existan medios judiciales apropiados y previo el agotamiento de los recursos ordinarios, significa un gran adelanto respecto de la protección de los derechos del hombre en Yugoslavia, y en cierto modo puede equipararse al recurso constitucional alemán (*Verfassungsbeschwerde*) así como a nuestro juicio de amparo, con mayor razón en cuanto que el párrafo final del artículo 39 de la Ley Reglamentaria mencionada establece la posibilidad de medidas precautorias decretadas por la Corte Constitucional para evitar la consumación de la violación, equivalentes a nuestra suspensión del acto reclamado.

El estudio de Szentic, no obstante su brevedad, analiza el procedimiento ante la Corte Constitucional Federal, similar en muchos aspectos al seguido ante el Tribunal Federal alemán (Cfr. Silvio Lessona, *La funzione del Tribunale Costituzionale Federale della Repubblica Tedesca*, en "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", Milano, 1964; pp. 799 y ss.), pues comprende una etapa preliminar para apreciar la procedencia de la reclamación y, posteriormente, audiencias públicas con asistencia de las partes interesadas.—Héctor FIX ZAMUDIO

STEVENS, R. The role of a final appeal court in a Democracy. V. Derecho procesal.